Globethics Repository



La Política ya no es lo que fue [Politics is not what it was]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Lechner, Norbert, 1939-2004
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-14 05:47:51
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/219506

La Política ya no es lo que fue[*]

Norbert Lechner

La preocupación prevaleciente por la transición democrática hace perder de vista que la misma política se encuentra en transición. A raíz de la a antinomia autoritarismo-democracia, tan presente en toda América Latina, la atención se centra en la transición hacia la democracia y en los obstáculos a dicha transición; se toma a la democracia como el punto de llegada, dando por sentado un destino fijo y unívoco. Una vez conquistados ciertos elementos mínimos del régimen democrático, la teoría democrática se vuelve extrañamente inocua para dar cuenta de los nuevos retos.

Norbert Lechner: Profesor investigador de FLACSO, sede México.

Percibimos que no es lo mismo tener democracia que gobernar democráticamente. La atención se desplaza a la política para descubrir que el gobierno democrático parece obedecer a criterios diferentes al credo democrático. Una cosa es la democracia como sistema normativo de organización y legitimación del poder político y otra cosa el abigarrado campo de las dinámicas, interacciones y constricciones en que se deciden (o no se deciden) las políticas democráticas. La política democrática tiene que ver no sólo con quién y cómo se decide, sino igualmente con la forma en que está organizada determinada sociedad y la forma con que concebimos y percibimos la intervención política en la vida social. Es decir, no podemos analizar los problemas y desafíos de una política democrática en nuestros países sin tener en cuenta las condiciones sociales e históricas en las cuales tiene lugar.

También en los países latinoamericanos actúan en mayor o menor grado un conjunto de megatendencias que están configurando un nuevo contexto. El

[*] Este artículo es una revisión de «Por qué la política ya no es lo que fue», aparecido en *Nexos* Nº 216, 12-1995, México.

predominio absoluto de la economía capitalista de mercado y los procesos de globalización, el colapso del comunismo y del sistema bipolar, el redimensionamiento del Estado, el nuevo «clima cultural» y la misma preeminencia de la democracia liberal, conforman un nuevo marco de referencia para cualquier política. No se trata, empero, de un simple marco de condiciones externas. Cabe suponer, por el contrario, que cambia no solamente el contexto de la política sino la política misma; de la cual conviene, pues, someter a revisión nuestra concepción.

Por largo tiempo, prevaleció una visión estática de la política que contrasta con la fácil distinción entre diversos estilos artísticos o incluso de estilos de desarrollo económico. A la luz de una idea a la vez inmutable y difusa de la política, se prestaba gran atención a los cambios políticos, pero no a los cambios de la política. Es hora de analizar los cambios en la manera de hacer y de pensar la política. La tesis central del trabajo consiste en argumentar que las grandes transformaciones en curso conllevan una transformación de la propia política. A continuación llamo la atención sobre algunos de los factores.

Antes, sin embargo, no está de más señalar dos advertencias. Se trata de una descripción muy esquemática que pretende resaltar algunas tendencias generales, pero que requiere múltiples matizaciones respecto a los factores mencionados y su vigencia en los diversos países latinoamericanos. No me refiero a mutaciones radicales que de golpe cambien la faz de la sociedad; los cambios suelen ser cuestión de grados, de mayor o menor énfasis, pero tales mudanzas acaso menores en ritmos y tonalidades son las que hacen la melodía. Es igualmente obvio, por otro lado, que los cambios señalados implican riesgos y oportunidades. Conllevan amenazas para las frágiles democracias de la región, pero también abren nuevas opciones para una profunda reforma de la sociedad.

La nueva complejidad social

Las sociedades contemporáneas, incluyendo las latinoamericanas, están viviendo un profundo proceso de diferenciación social y funcional. La industrialización y urbanización de nuestros países producen una continua diferenciación de la estructura social que disuelve el rígido orden jerárquico de clases y estamentos y establece múltiples roles para cada individuo. A la diferenciación social, operando de larga data, se añade ahora la diferenciación funcional de los diversos campos o «subsistemas» sociales - economía, derecho, arte, ciencia, etc. - que adquieren creciente autonomía, con racionalidades específicas y difícilmente conmensurables

entre sí. La nueva complejidad social conlleva dos consecuencias cruciales para nuestro tema. La pluralidad de espacios más y más autónomos, regulados por criterios contingentes y flexibles, segmenta los intereses materiales y mina los principios universales y las creencias colectivas que servían de anclaje a las identidades colectivas. Estas se diluyen en un sinnúmero de pequeñas «tribus» transitorias entre las cuales los individuos deambulan como nómadas compartiendo en cuotas segmentadas los intereses y las emociones del respectivo grupo. Por otra parte, la multiplicación de «lógicas» específicas debilita la «unidad» de la vida social a un punto tal que la sociedad carece de noción de sí misma. Luhmann y otros advierten el advenimiento de una sociedad sin centro, o sea sin un núcleo rector que coordine y regule los distintos «subsistemas» de la vida social. Nuestras sociedades despliegan una diversidad radical que acentúa la anterior «heterogeneidad estructural». Ello plantea un problema fundamental de nuestra época: el cuestionamiento del Estado y de la política como instancias generales de representación y coordinación de la sociedad.

En este contexto se vislumbran dos transformaciones profundas de la política. En términos de espacio social, se encuentra en entredicho su centralidad. La nueva diversidad estructural pone en jaque la función integradora de la política, que pierde fuerza como vértice ordenador de la sociedad. En la medida en que una coordinación policéntrica acota el ámbito de la política como instancia coordinadora de los procesos sociales, queda por redefinir no sólo el lugar sino el valor mismo de la política. Vale decir: ¿para qué sirve la política y qué podemos esperar de ella? Puesto que ya no opera como instancia unificadora de la vida social, al menos puede articular las diferencias. Pero tal construcción de un «orden de diferencias» también es problemático si consideramos, por otro lado, la dimensión temporal. Si los diferentes campos sociales obedecen más y más a racionalidades propias y diferenciadas, ello implica que también desplegarán dinámicas específicas. Es en este sentido funcional (y no sólo de espacios regionales) que nos acercamos a una «sociedad a múltiples velocidades». De ser así, la política no sólo no marca el ritmo del desarrollo social sino que, estructuralmente, se encuentra desfasada con las dinámicas de otras áreas sociales. En lugar de pensar en una «correspondencia» entre desarrollo político y desarrollo económico, cultural, tecnológico, etc., habría que asumir una asintonía estructural entre los diferentes campos.

Sociedad de mercado y nueva sociabilidad

El mercado no es algo nuevo en América Latina, pero sí la gravitación social que adquieren sus mecanismos. Los países latinoamericanos tienen no sólo una economía capitalista de mercado, sino que se dirigen con pasos más o menos grandes hacía una *sociedad de mercado*; o sea, una sociedad con normas, actitudes y expectativas conformes al mercado. La mercantilización de las más diversas relaciones sociales moldea un nuevo tipo de sociabilidad. Prevalece el cálculo racional-instrumental del intercambio mercantil - el «toma y daca» del mercado (el *do ut des* del derecho romano) - imprimiendo a las relaciones sociales un sello más individualista-egoísta. No es casual que, cuando todo parece transable, el dinero se constituya en el «equivalente general» de todos los bienes, relegando al ámbito privado consideraciones de amor, amistad, solidaridad. A la vez, tiene lugar precisamente un proceso de privatización, un retiro hacia «lo privado» como esfera privilegiada de la vida social. Tal desplazamiento puede ser visto como causa y efecto de la interpelación neoliberal a los intereses individuales, rompiendo con la tradición comunitaria creada en torno al ámbito y los bienes públicos.

El cambio de sociabilidad, más visible en las grandes ciudades, señala un desplazamiento mayor: la reestructuración de la relación entre esfera privada y pública. Actualmente, el ámbito público tiende a ser mucho menos determinado por la política que por el mercado. Vale decir, lo público ya no es primordialmente el espacio de la ciudadanía; en cambio, el mercado adquiere un carácter público y sus criterios (competitividad, productividad, eficiencia) establecen la medida para las relaciones públicas. Por supuesto, no se trata de un vuelco total y el proceso debe ser matizado. El hecho es que cuando todos los límites establecidos se ven cuestionados, también la frontera entre lo público y lo privado se difumina. Vemos, por otra parte, que múltiples asuntos que formaban parte del mundo privado ahora ganan visibilidad pública: desde la condición de género, la identidad étnica o las preferencias sexuales hasta la indefensión del consumidor en el mercado. Es decir, la agenda pública comienza a estar teñida de experiencias privadas, haciendo valer la dimensión política de la vida cotidiana.

Todo ello parece indicar cierta redefinición de la ciudadanía. Su ejercicio ya no queda restringido al ámbito público y, en cambio, se nutre de una subjetividad que, a su vez, tampoco queda recluida al fuero interno y, por el contrario, se incorpora al debate público. Se trata de un proceso incipiente, pero torna visible la diferencia con la democracia liberal. Mientras ésta se apoya en la escisión entre *citoyen y bourgeois*, donde la igualdad de los ciudadanos prohíbe la discriminación según raza, sexo, religión, ahora la cultura étnica, la identidad sexual o las prescripciones religiosas integran los estatutos de identificación ciudadana.

Nueva relación entre Estado y sociedad

Frente a la preeminencia avasalladora del mercado conviene recordar la paradoja neoliberal: los casos exitosos de liberalización económica no descansan sobre un desmantelamiento estatal sino, muy por el contrario, presuponen una fuerte intervención del Estado. Pero ya no se trata del anterior modelo estatal; en mayor o menor medida tiene lugar una reforma del Estado sobre la base de reducir las empresas públicas, reorientar las políticas sociales, descentralizar y desburocratizar al aparato estatal, racionalizar la gestión pública y una reglamentación frondosa, en fin, incrementar la eficiencia económica de la acción estatal. Todo ello redimensiona el papel del Estado y, en particular, de las políticas públicas; éstas ya no se refieren tanto a la integración social como a la «competitividad sistémica» del país en los mercados mundiales. Me parece importante resaltar este giro (impulsado por la victoria absoluta de la economía capitalista de mercado y la menor amenaza nuclear) que por ahora caracteriza la política; toda decisión política se encuentra, por así decir, «sobredeterminada» por su eventual impacto económico. La misma prioridad atribuida a las funciones económicas, sin embargo, inhibe ver otras dimensiones. Al enfocar exclusiva y unilateralmente la relación entre Estado y mercado se escamotea el problema de fondo: la nueva relación de Estado y sociedad. Quiero decir: las profundas transformaciones de la sociedad latinoamericana requieren un nuevo tipo de Estado. El mencionado proceso de diferenciación pone en duda al Estado en tanto «síntesis de la sociedad civil» (Marx). ¿Cómo llevar a cabo la unificación (normativa, simbólica, lingüística) de la vida social de cara a la creciente diversidad?

Bien visto, la reorganización estatal supone una redefinición, una nueva concepción del Estado. Ni el viejo estatismo ni el nuevo antiestatismo ofrecen una perspectiva adecuada. Me parece más fructífero asumir las transformaciones en curso como punto de partida para reformular los objetivos. En realidad, el doble movimiento - diferenciación de la sociedad y redimensionamiento del sector público - plantea amenazas a la integración social, pero también oportunidades para una profunda reorganización social. De hecho, los procesos en marcha limitan tanto el exceso de demandas dirigidas al Estado como su propia intervención indiscriminada. En este sentido, un papel más acotado del Estado *puede* favorecer una mayor autonomía de los ciudadanos. Señalo la tendencia con suma cautela porque observo una apología del ciudadano autónomo y racional que, en el fondo, repite la utopía del mercado. Dicho con prudencia, existen condiciones favorables (no sé si necesarias y suficientes) para «ciudadanizar» la política, desplazando su

eje del ámbito estatal al ciudadano. Existe, en buenas cuentas, la oportunidad de reformular las metas de una reforma y apuntar a un Estado concebido como la *comunidad de ciudadanos*. Tal perspectiva permite conciliar la tradición liberal, haciendo hincapié en los derechos ciudadanos de cara al poder estatal, con la tradición comunitarista que valora al Estado como totalización simbólica de la comunidad. De hecho, es notorio por doquier el desarrollo de una nueva conciencia de los derechos ciudadanos, de la dignidad del ciudadano(a) y, en definitiva, de la ciudadanía como fundamento de la acción estatal. Queda pendiente empero, cómo tal exigencia de una relación «adulta» entre ciudadanos y su Estado se traduce en instituciones y estilos políticos.

Nuevos procesos de comunicación

La preeminencia de la palabra, de los grandes relatos y aun de los discursos políticos ha sido desplazada en años recientes por la imagen. Vivimos inmersos en una cultura de la imagen que altera la idea que nos hacemos de la política. Para bien y para mal, ya no podemos pensarla al margen de la televisión. Cuando el don de la palabra es restringido por el manejo de la imagen, cambian las estructuras comunicativas sobre las que se apoyan tanto las relaciones de representación como las estrategias de negociación y decisión. Los dispositivos del *marketing* no reemplazan, pero modifican la deliberación ciudadana. Mientras que los políticos compiten denodadamente por la atención, siempre limitada, del televidente, éste ha de enfrentar mudo una invasión de estímulos. Fragmentada en miles de instantáneas inconexas, la política ha de ser reconstruida como un caleidoscopio de *flashes*. Existe una sobreoferta de información que no hace sino resaltar la erosión de los códigos de interpretación. Ello nos remite a los desafíos que enfrentan las culturas políticas.

Más allá de su impacto estrictamente político, la televisión ilustra la descomposición de las claves con que habitualmente interpretamos el mundo. Una catarata de imágenes fugaces y repetitivas diluye la realidad a la vez que la vuelve avasalladora. El desconcierto de nuestro «sentido de realidad» refleja el redimensionamiento de las nociones de espacio y tiempo. Por un lado, una comunicación planetaria cuestiona el provincianismo reinante y los límites establecidos, abriendo nuevos horizontes y, por ende, nuevas opciones. Simultáneamente, no sólo difumina la frontera entre espacio privado y espacio público; además, la globalización de las comunicaciones desterritorializa el universo simbólico, poniendo en entredicho los sentimientos de pertenencia y arraigo. Por otro lado, la televisión refleja bien la aceleración del tiempo en nuestra

época. Un ritmo más y más vertiginoso consume vorazmente cada instante. No hay otro tiempo que el tiempo presente, un presente omnipresente. Ya no hay tiempo para procesos de aprendizaje y maduración; los plazos se acortan y sólo aceptan metas cercanas. La misma política se retrotrae a lo inmediato, sin lograr elaborar horizontes de futuro compartido.

De las muchas y complejas consecuencias de esta reestructuración destaco sólo un aspecto. Cuando la gente ya no comparte nociones similares de espacio y tiempo o, más exacto, cuando se ensancha desmesuradamente la brecha entre los diversos grupos sociales con relación a sus respectivos horizontes temporales y referentes espaciales, se hace más difícil la conformación de un sentido común. Se resquebraja el piso de «evidencias» compartidas acerca de lo que es «normal y natural» sobre el cual se levanta la comunicación cotidiana y, en concreto, el debate político. Se acentúan las tendencias centrífugas favoreciendo un escenario babélico en el que cada actor tiene su propio lenguaje sin entender a los demás. En caso que lleguen a cristalizar tales racionalidades particulares, sin denominador común, el valor de las instituciones y de cualquier regla de juego deviene precario, incitando conductas no institucionales. Ello ayuda a comprender los obstáculos que enfrentan hoy en día los actores políticos en la elaboración de consensos y, por tanto, en la construcción de vinculaciones recíprocas mediante las cuales enfrentar en conjunto los avatares del futuro.

Es notorio el desarrollo de una nueva conciencia de los derechos ciudadanos, de la dignidad del ciudadano(a) y de la ciudadanía como fundamento de la acción estatal.

Las nuevas incertidumbres

Basta recordar la infancia tan cercana, todavía marcada por pautas rurales y frecuentemente señoriales, para vislumbrar la rapidez y magnitud de los cambios sociales ocurridos en los últimos años. Continuamente se vienen abajo las interpretaciones que tan esforzadamente elaboramos al punto que al final ya no sabemos qué es lo que en realidad vivimos. La realidad titila cual *fata morgana* y aun su violencia más dolorosa levita como una pesadilla aterradora y a la vez incierta. Quiero decir, la vida pierde sus límites claros y precisos y, usando una expresión del novelista Javier Marías, descubrimos que estamos hechos en igual medida de lo que fue y de lo que pudo haber sido. Somos también lo que no hemos sido. Si resulta costoso hilvanar una biografía hecha de tan diversos retazos, tanto más arduo es aseverar quiénes somos «nosotros». Las identidades colectivas se

fragmentan a la par con la disgregación de los valores y hábitos, las creencias y experiencias que estructuraban la trama social. El proceso de secularización descompone las religiones y, por ende, las respuestas heredadas a los interrogantes básicos de la vida. Predomina una situación de desamparo en que las certezas tradicionales se desmoronan, se diluyen los anclajes simbólicos y las ataduras normativas pierden obligatoriedad sin reemplazo. Entonces los individuos, abandonados y aislados, se aferran fanáticamente a las verdades históricamente sedimentadas como «naturales»; o bien, elaboran arreglos *ad hoc* que sirvan de refugio provisorio mientras buscan un destino verosímil. Ni así los cambios dan tiempo a que se consolide algo duradero. En suma, reina la incertidumbre. A las viejas incertidumbres que plantea la vida, las transformaciones en curso, más cargadas de amenazas que de promesas, agregan nuevas incertidumbres, generando ese clima de temor difuso en que todo es posible y nada pasa (todavía). Se trata de un clima o ambiente indeterminado en que nada es previsible y, por lo mismo, cualquier cambio causa alarma.

En tal situación adquieren supremacía dos consignas siempre presentes en política. Por un lado, la anterior demanda de cambio social es relegada por la *demanda de estabilidad*. Ya no se trata tanto de revolucionar estructuras anquilosadas como de exorcizar la sensación de lo efímero y asegurar algo perdurable en el tiempo. Cuando todo se mueve y ningún movimiento es previsible, la creación de referentes firmes resulta indispensable para evitar el vértigo y desarrollar conductas mínimamente predecibles. Por eso, en países con elevada tasa de inflación o violentos vaivenes políticos el deseo de estabilidad prevalece al punto de desplazar otras preferencias, incluyendo las mejoras económicas, a un rango secundario. La misma democracia ha de justificarse por sobre todo como un orden calculable, o sea de conflictividad acotada. Más que en la época anterior, la estabilidad representa un prerrequisito de la acción política y, en definitiva, una condición básica de racionalidad. Por otro lado, se agudiza la *demanda de protección*. Sea cierto o no el incremento de la criminalidad o del costo de la vida, en todo caso crece el sentimiento de amenaza a la integridad física y seguridad económica. Pero los riesgos no son sólo materiales; tras la violencia y la guerra, el sida y el desempleo, rápidamente se sospecha de fuerzas oscuras. La percepción de inseguridad se potencia en un clima de incertidumbre que, finalmente, sólo se apacigua con certezas. La demanda de protección apunta tanto a las condiciones materiales de vida como a la seguridad simbólica y normativa. Al fin y al cabo, se requiere de ciertos criterios por sobre toda sospecha para manejar la vida cotidiana.

Se trata de demandas poderosas, pero sin contenido ni destinatario preciso. Ambas invocan la política en tanto instancia garante del orden. El sistema político se ve pues confrontado a exigencias que las instituciones y los procedimientos democráticos no suelen procesar, al menos en términos explícitos. No basta entonces aducir una «sobrecarga» del régimen democrático; hay que encauzar tales demandas so pena de que desencadenen «soluciones» no políticas. Ello nos remite a un último aspecto.

Las transformaciones de la política

Finalmente cabe mencionar en este breve recuento las transformaciones de las instituciones políticas y, en particular, de la misma política. En parte por las razones antes mencionadas, en parte por dinámicas internas, la política ya no es lo que era. Un rasgo sobresaliente ya fue mencionado: el *descentramiento* de la política. Vale decir, se debilita el lugar central que la política ocupara en la organización social. La política institucionalizada ve restringido su campo de maniobra porque son más limitados los recursos disponibles y más arriesgadas las apuestas acerca de los resultados previsibles de una decisión (o sea, más difíciles de determinar las opciones viables). Pero además se restringe la capacidad política de intervenir en otras áreas porque éstas obedecen más y más a cánones específicos que escapan al control de la «lógica» política. ¿Qué asegura la «unidad» de la vida social en tanto sociedad? Existen mecanismos de interdependencia e integración sistémica, por cierto, pero nada dicen acerca de la dirección que toman las dinámicas. La capacidad de conducción política se encuentra así en entredicho en el momento mismo en que se vuelve más acuciante la pregunta ¿hacía dónde vamos? Ilustrativo de ello son las dificultades de la política no sólo por decidir el rumbo del desarrollo económico o científico-tecnológico sino, en general, por definir un proyecto de futuro para el país.

La pérdida de centralidad va acompañada de una *informalización* de la política. Quiero decir, la política realmente existente desborda las relaciones formalizadas del sistema político, permeando los límites entre lo político y lo no político. Ejemplos de ello son las redes informales entre instancias gubernamentales y actores sociales o la reformulación de los derechos ciudadanos a partir de la esfera civil. La informalización acorta la distancia entre política y sociedad, pero simultáneamente provoca cierto vaciamiento de las instituciones políticas. Ellas ya no escenifican las grandes alternativas acerca del desarrollo nacional; ahora los clivajes se desmigajan en múltiples microdecisiones tomadas *ad hoc*. Ello da lugar a una situación paradojal: la nueva complejidad de los procesos sociales produce

una fuerte demanda por conducción política, al mismo tiempo que dificulta elaborar políticas de Estado que condensen consensos a largo plazo.

En este contexto hemos de situar a quienes son los agentes privilegiados de una política democrática: los partidos políticos. Estos viven por doquier, indistintamente de su signo ideológico, una fase crítica de redefinición pues carecen de discurso y de estrategia de cara a las grandes transformaciones en marcha. Se han quedado sin discurso en tanto interpretación global que permita ordenar la realidad en un panorama inteligible y estructurar la diversidad de intereses y opciones en torno a algunos ejes básicos. Carecen no sólo de «discurso ideológico» sino igualmente de «discurso programático» en tanto propuesta de futuro. Con la aceleración del tiempo y el consiguiente desvanecimiento del futuro, les resulta difícil elaborar un proyecto de país que aglutine y canalice las energías en determinada perspectiva. Parafraseando una conocida tesis de Downs, se podría afirmar que los partidos no ganan elecciones para llevar a cabo sus programas; formulan programas para ganar las elecciones y una vez en el gobierno verán día a día lo que pueden hacer. No corresponde, empero, culpar a los partidos; ellos sólo expresan de manera especialmente cruda la perplejidad de estos tiempos. En períodos dominados por la contingencia son muchas las dificultades en diseñar estrategias razonablemente consistentes. Bajo las nuevas condiciones, los partidos y, mucho más el gobierno, están obligados a ser sumamente flexibles en la selección de sus metas y acotar los resultados intencionales a los breves plazos previsibles, renunciando a líneas de acción de más largo alcance. Ni las «planificaciones globales» ni las «alternativas globales» tienen asidero (lo cual no elimina tales intentos). La fuerza de los hechos acota las opciones viables y, por tanto, favorece estrategias de conflicto limitado. Las decisiones acerca de lo que es y puede ser el orden social siguen siendo políticas, pero se restringe el campo de lo políticamente decidible.

Ello no elimina las diferencias interpartidistas, pero les hace más difícil a los partidos tener un perfil nítido. De allí un sinfín de polémicas y polarizaciones artificiales que minan la de por sí débil identificación ciudadana. Cabe entonces interrogarse acerca de la forma tradicional del partido político. Considerando las tendencias prevalecientes parece necesario adecuar las modalidades organizativas para articular las relaciones de cooperación y competencia tanto al interior del partido y del sistema de partidos como en relación con el gobierno. Falta revisar, por otra parte, la inserción social de los partidos. Su legitimación depende, en buenas cuentas, de su capacidad de armonizar el nuevo protagonismo de la ciudadanía con el carácter representativo de la democracia, configurando una

relación «adulta» entre lo que los ciudadanos esperan de la política democrática y lo que ella puede ofrecer al ciudadano.

A modo de conclusión

He reseñado algunos de los elementos que me hacen pensar en una transformación de la política. Al enfocar dicha transformación salta a la vista el desfasaje entre las imágenes estáticas que tenemos de la política y las nuevas modalidades del quehacer político. Tal desajuste es en parte inevitable, pero tiene efectos inconvenientes. Por un lado, crea falsas expectativas acerca de lo que la política puede hacer y distorsiona las «medidas dadas» con las cuales evaluamos el desempeño político. Por el otro, la acción política se guía por imágenes obsoletas o criterios de orientación inadecuados y, por tanto, no está en condiciones de discernir los objetivos factibles y de ver las nuevas oportunidades. Ello conduce a esa aparente ausencia de alternativas que caracteriza nuestra época. No deja de ser desconcertante, en efecto, que precisamente en nuestro tiempo, lleno de cambios, parecería no haber otra opción que «más de lo mismo». Ahora bien, el desconcierto no es atenuante en política y, por el contrario, obliga a una reflexión más aguda.

En el fondo, necesitamos una redefinición de la política; no en el sentido de una definición taxonómica, sino de una comprensión más cabal de la(s) «lógica(s)» que condicionan la acción política en nuestras democracias. Un paso inicial hacia la elaboración de una nueva concepción de la política consiste, a mi entender, en precisar las principales tendencias en juego. A modo de conclusión y de prospectiva pongo a discusión dos posibles ejes estratégicos. Pienso, en primer lugar, en los procesos de diferenciación funcional que, bajo el impacto de la globalización, hacen saltar en añicos la antigua «unidad» de la sociedad. Por otra parte, la vida social no puede prescindir de mecanismos de cohesión social. Transformar la diversidad fáctica en una pluralidad democrática supone un ordenamiento: un orden articulado de las diferencias. A la luz de esta tensión irreductible entre diferenciación e integración social me pregunto por el *locus* o estatuto de la política como instancia central de representación y coordinación de las relaciones sociales. ¿En qué medida y de qué forma puede la política democrática cumplir el papel de ámbito articulador de procesos tendencialmente autónomos?

Tal fragmentación me hace pensar, en segundo lugar, en una asintonía estructural entre la política y otras esferas de la vida social. Me refería arriba a las «sociedades a velocidades múltiples» que, según parece, ya no son sincronizadas por la política.

Vale decir, los procesos políticos ya no pueden ser enfocados «en correspondencia» con los procesos económicos, culturales, tecnológicos, etc., sino que deberían ser analizados acorde a sus propios ritmos. Considerando esas dinámicas particulares, ¿en qué medida y mediante qué mecanismos existe todavía alguna sintonización política de los distintos tiempos sociales?

Valgan estas alusiones tentativas para insinuar el tipo de reflexiones y exploraciones que me parecen necesarias para renovar nuestras formas de pensar y de hacer política.

*Anónimo TTI: ¿ Por qué la política ya no es lo que fue?, NEXOS. 216 - México. 1995;